

**JDO. DE LO SOCIAL N. 1
MURCIA**

SENTENCIA: 00529/2013

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

AVD. COLEGIO DE PROCURADORES DE MURCIA, S/N - CIUDAD DE LA JUSTICIA - CP. 30011
MURCIA

Tfno: 968-817089

Fax: 968

NIG: 30030 44 4 2013 0000429

N02700

Nº AUTOS: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000055 /2013

DEMANDANTE/S: [REDACTED]

ABOGADO/A: [REDACTED]

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S: FONDO DE GARANTIA SALARIAL, [REDACTED],
S.A.

ABOGADO/A: ,

PROCURADOR: ,

GRADUADO/A SOCIAL: ,

En MURCIA, a siete de Junio de dos mil trece.

D. RAMON ALVAREZ LAITA Magistrado/a Juez del JDO. DE LO SOCIAL N. 1 tras haber visto el presente DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000055 /2013 a instancia de D. [REDACTED], que comparece asistido de la letrada Doña [REDACTED] contra el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, que no compareció pese a estar legalmente citado, [REDACTED] S.A., representado por el letrado D. [REDACTED]

, EN NOMBRE DEL REY, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA 529

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. [REDACTED] presentó demanda de DESPIDO contra el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, y contra [REDACTED], S.A., en la que exponía los hechos en que fundaba su pretensión, hacía alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizaba con la súplica de que, tras su legal tramitación se dicte sentencia en la que se acceda a lo solicitado en el suplico de la demanda.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se ha celebrado juicio con el resultado que obra en las actuaciones.



TERCERO.- En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Resultando probado que D. [REDACTED], trabajó para la empresa [REDACTED] S.A. desde el día 7-6-2010, con categoría de conductor-mecánico, actividad de la empresa transporte, en el Centro de trabajo de [REDACTED] Madrid, pero el actor prestaba servicios en la contrata del transporte del correo Murcia-Barcelona y vuelta, con salario incluida prorrata de extras 1.594, 59 euros mes, y a efectos de trámite de 53,15 euros día, que, no era Delegado de Personal Sindical o miembro del Comité de Empresa.

SEGUNDO.- El actor fue despedido verbalmente por la empresa, pero suscribió documento de liquidación y finiquito el 29 de noviembre de 2012; y se le ingresó en cuenta la liquidación que incluía la cantidad de 1.043,03 euros en concepto de indemnización. En dicho documento se hizo constar. El suscrito trabajador, habiendo cesado en la prestación de sus servicios por cuenta de la empresa como consecuencia de Fin de contrato temporal en fecha 29-11-2012, recibe en este acto la liquidación de sus partes proporcionales en la cuantía y detalle que se expresan al pie, con cuyo percibo reconoce hallarse saldado y finiquitado por todos los conceptos con la referida empresa, conforme con la extinción de su contrato de trabajo y las razones que motivaron la misma, renunciando al ejercicio de acción alguna contra la citada extinción, no existiendo suma alguna pendiente de pago por parte de la mencionada empresa, incluyendo sin carácter limitativo sino meramente enunciativo: indemnización por despido disciplinario u objetivo, salarios, salarios de tramitación, remuneración variable o incentivos, bonus, beneficios de cualquier índole, compensaciones, vacaciones, gastos, etc, por lo que se compromete a nada más pedir ni reclamar, renunciando expresamente al derecho a interponer acción o reclamación de cualquier índole contra la decisión extintiva empresarial o por reclamación de cantidades, ya sea salariales, extrasalariales o indemnizatorias, (incluyendo con carácter meramente enunciativo, que no limitativo, acciones laborales, mercantiles o civiles), y ante cualquier jurisdicción contra la empresa.

TERCERO.- Tras la firma del finiquito el día 29 de noviembre de 2012, el actor presentó papeleta de conciliación el día 3 de enero de 2013, el acto de conciliación se celebró el día 21 de enero de 2013, el actor o su representante acudió a presentar la demanda a la oficina de correos de Murcia ese mismo día 21 de enero, pero entrando en el registro de los Juzgados el día 23 de enero de 2013, al día siguiente se efectuó el reparto.



CUARTO.- El trabajador prestaba servicios en la conducción del transporte diario de correo entre Murcia y Barcelona, realizado por su empresa, en virtud de una contrata con la entidad pública empresarial de correos. El contrato siguen en vigor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se articula por el actor demanda impugnado el despido producido se opone la empresa que alega la existencia de la caducidad de la acción, la existencia de un finiquito libremente suscrito, el ingreso de la liquidación en la cuenta del actor. Se practica prueba documental e interrogatorio de las partes. Caracteriza el procedimiento el hecho de que la parte actora tras redactar una sucinta demanda mantiene en su interrogatorio y luego en conclusiones hechos no mencionados en la demanda, como es la contratación para una tercera empresa, que se afirma pertenece al mismo grupo que la empleadora, como quiera que el accionante afirma que ya no presta servicios para la misma y que no interpuso demanda contra la misma el juzgador no considero pertinente la ampliación de la demanda a ella, dado que pudiera constituir una variación sustancial de la demanda.

SEGUNDO.- La LRJS prevé en su artículo 44, cuando se refiere al lugar de presentación de escritos y documentos, que las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los Registros de la oficina judicial adscrita a los Juzgados y Salas de lo Social. Añadiendo tan solo que cuando las oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y de su fecha, los escritos y documentos podrán enviarse y recibirse por aquellos medios, con plenos efectos procesales, con el resguardo acreditativo que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del art. 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De lo que antecede resulta que tan solo son sitio idóneo para la presentación de los escritos y, especialmente el de demanda, los registros generales de los Juzgados. El actor opto por presentar la demanda en correos, al parecer por el procedimiento administrativo, pero la fecha no es apta al haber una Ley especial, como es la antigua LPL o la nueva LRJS (precepto anteriormente mencionado). Aun tomando la postura mas beneficiosa para el actor, dando validez a la demanda remitida por correo, la fecha de presentación de la misma seria la del día en que tuvo entrada en los registros generales de los Juzgados. Sin embargo comete un error aquí la parte demandada, el escrito de demanda no tuvo entrada en el registro general el día 24, sino el día 23, como consta en la diligencia informática de inicio del procedimiento, esa fecha del día 24 lo es la del día en que se efectuó el reparto. Debe de tener en cuenta, además, que el ejercicio de la acción judicial por despido -lo mismo que el de cualquier otra acción que nos confiera el ordenamiento jurídico- sólo podrá materializarse a través de la presentación de una demanda ante



el correspondiente órgano jurisdiccional, y parece indiscutible que la demanda se contiene en un «escrito». Pues bien: a la vista de que el art. 135.1 de la vigente LECiv comienza diciendo «cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo», no parece posible otra interpretación que considerar comprendido entre tales escritos aquel en el que se contiene la demanda, aun cuando con tal demanda se esté ejercitando una acción por despido, pues es este escrito precisamente el que da inicio al proceso; y tal proceso es la única institución jurídicamente arbitrada para poder exigir ante los tribunales el cumplimiento de las obligaciones que el presunto obligado no está dispuesto a cumplir de manera voluntaria. En otras palabras: el proceso por despido, que es el que aquí nos ocupa, únicamente puede entablarse mediante la presentación de una demanda, y esta demanda tiene legalmente atribuida la condición de «escrito», cuyos requisitos generales se regulan en el art. 45.1 de la LJS: Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial. Así pues, no existe motivo alguno que impida llevar a cabo la presentación del escrito del que tratamos en el tiempo previsto en el citando art. 135.1 de la LECiv., por lo que se debe convenir que la demanda se presente el día 21 del plazo, antes de las quince horas y, por lo tanto la acción no esta caducada.

TERCERO.- Se opone la empresa afirmando la existencia de un finiquito liberatorio. Debe resumirse la doctrina al respecto, señalando que la Sala de lo social del T.S. tiene una consolidada doctrina acerca del valor que ha de reconocerse a los acuerdos suscritos entre empresario y trabajador, tras la finalización de la relación laboral por despido y, al hilo de la firma del recibo de saldo y finiquito ha señalado lo siguiente: " Es manifestación externa de un mutuo acuerdo de las partes, que constituye causa de extinción de la relación laboral, según el art. 49.1 a) E.T , es decir, expresión de un consentimiento que, en principio, debe presumirse libre y conscientemente emitido y recaído sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato, art. 1262 C.C. y, por ello, para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato debe incorporar una voluntad unilateral del trabajador, un mutuo acuerdo sobre la extinción o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario, en palabras de la STS. 26-11-01". Respecto a la eficacia y valor liberatorio del finiquito en sentencia de 22 de marzo de 2011, recurso 804/10, se consigna que la Sala ha señalado que por regla general debe reconocerse a los finiquitos, como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponden en función del alcance de la declaración de voluntad, que incorporan (STS 21-07-09). Poniendo de relieve que los vicios de voluntad, la ausencia de objeto cierto que sea materia del pacto, o la expresión en él de una causa falsa, caso de acreditarse, privarían al finiquito de valor extintivo o liberatorio, al igual que ocurrirá en los casos en que el pacto sea contrario a una norma imperativa, al orden público o perjudique a terceros, o contenga una renuncia genérica y anticipada de derechos contraria a los artículos



3.5 E.T. y 3 L.G.S.S. y que para evitar, en lo posible, que se produzcan tales situaciones, el trabajador cuenta con los mecanismos de garantía que instrumentan los artículos 49.1 y 64.1-6º E.T.. Respecto a la renuncia de derechos la reciente jurisprudencia de la Sala, STS 21-07-2009, ha señalado que "una cosa es que los trabajadores no puedan disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario o por convenio colectivo y otra la renuncia o indisponibilidad de derechos que no tengan esa naturaleza, entre los que se encuentran la renuncia del puesto de trabajo y las consecuencias derivadas. Una limitación, al efecto, violaría el derecho concedido por el artículo 49.1 a) y d) E.T. a extinguir voluntariamente su contrato o a conciliar sus intereses económicos con el empleador y, también infringiría la norma común de contratación establecida en el artículo 1256 del Código Civil que únicamente sanciona con nulidad el contrato cuyo cumplimiento quede al arbitrio de una de las partes contratantes". La prohibición de renuncia de derechos no impide acuerdos transaccionales que pongan fin a los conflictos laborales, tal como han señalado las STS 27-04-06. Desde esta perspectiva parece claro que el finiquito puede cumplir esa función transaccional, aunque quede al margen, como en el presente caso, de los cauces institucionales de conciliación. Pero para que la disposición sea válida será necesario que el acuerdo se produzca para evitar o poner fin a una controversia (artículo 1809 C.c.), en la que el derecho en cuestión aparezca como problemático. Por otra parte el objeto de la transacción debe estar suficientemente precisado, como exige el artículo 1815 C.c., sin que puedan aceptarse declaraciones genéricas de renuncia que comprendan derechos que no tienen relación con el objeto de la controversia (art. 1815.2 C.c.).

CUARTO.- La aplicación de la anterior doctrina conduce a la estimación de la demanda formulada. A este respecto hay que señalar que el documento que el trabajador suscribió el 29 de noviembre de 2012 tiene el contenido reflejado en los hechos probados. No procede atribuir ninguna virtualidad extintiva al hecho de que el trabajador haya firmado el citado documento pues fue la empresa y no el trabajador la que procedió unilateralmente a extinguir el contrato, a prerredear en el domicilio social de la empresa el mismo, existiendo indicios de que lo hizo convencido de una nueva contratación para otra empresa, como así fue; sin preaviso alguno se le extinguió el contrato mediante la puesta a la firma del citado documento, que el trabajador suscribió. En el citado documento, le ofrece únicamente la cantidad de 1.043,03 euros, cuando le correspondían 5.358,87 euros, y sin que exista motivo alguno, por lo exigua que es la indemnización ofrecida. Es cierto que le fue transferida y que fue nuevamente contratado por otra empresa de la que aparece como administrador solidario quien también lo es de la despedidota, hecho no alegado en la demanda, pero que permite corroborar el motivo por el que el actor suscribió aquel documento. Que cubrir la línea de transporte de correo diaria ente Murcia y Barcelona es una actividad fija de la empresa, no da lugar a ninguna duda, sin que conste que la contrata de la empresa publica fuera objeto de rescisión o de modificación. En virtud de todo ello el



despido deviene como improcedente, más aun cuando no se articulo con carta de despido.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que sin apreciar la excepción de caducidad articulada por la demandada, en relación con la demanda interpuesta por Don [REDACTED] contra la empresa [REDACTED] S.A. debo estimar la demanda de despido interpuesta y declarar la improcedencia del despido producido el día 29 de noviembre de 2012 y condeno a la empresa a que, a su opción que formulara ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde la notificación de sentencia, o readmita al trabajador en las mismas condiciones o le indemnice en la cantidad de 5.358,87 euros, y al abono de salarios de tramite, dependiendo de la opción que formule, en cuantía de 53,15 euros día desde la fecha del despido hasta la de formalización de la opción. De la citada indemnización podrá descontarse la cantidad entregada bajo el concepto indemnización en el finiquito al que se hace referencia en los autos. Con responsabilidad del FOGASA en sus límites, para el caso de insolvencia empresarial.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, **surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas** hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo **carga procesal de las partes** y de sus representantes **mantenerlos actualizados**. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Advierto a las partes que:

- Contra esta sentencia pueden **anunciar Recurso de Suplicación** ante el Tribunal Superior de Justicia de MURCIA y por conducto de este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 en el plazo de **cinco días** desde la notificación de esta sentencia.
- En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.
- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia



gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, **consignar** la cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber **depositado** la cantidad de **300 euros**, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la Entidad Bancaria BANESETO, S.A., sucursal PRINCIPAL cuenta nº 3092-0000-67-0055-13, debiendo hacer constar en el campo observaciones la indicación de depósito para la interposición de recurso de suplicación.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

